

Gobernadores oficialistas y opositores acuerdan rumbo con el régimen de Macri

JULIO C. GAMBINA :: 20/11/2017

Hasta ahora, solo San Luis queda afuera del acuerdo suscripto entre el Poder Ejecutivo Nacional y los gobernadores de Provincia.

No solo se trata de un pacto que remite al reparto de los recursos fiscales entre la Nación y las Provincias, sino a un pacto político que allana el rumbo trazado por Mauricio Macri desde que asumió la gestión presidencial en diciembre del 2015; ratificado con la ampliación del consenso obtenido en las elecciones de medio término en octubre pasado.

El acuerdo supone declinar la continuidad de los juicios de las Provincias contra la Nación, algunos con sentencias en firme, pero con dificultades concretas para asegurar las cancelaciones. Por esto es que los gobernadores desde una lógica pragmática aceptaron cancelaciones en bonos cobrables en el mediano plazo antes que un futuro de demandas de percepción de sentencias judiciales de dudosa cobrabilidad.

Con el resultado electoral del 22/10/2017, la iniciativa política del Gobierno Nacional aseguró los consensos de oficialistas y opositores al frente de los gobiernos provinciales, con la excepción por ahora de San Luis.

Todos apuntan a la Gobernadora bonaerense como la gran ganadora, por asegurarse imprescindibles fondos para la gestión en los próximos dos años antes de la renovación del gobierno provincial en disputa en 2019.

El PRO en Cambiemos necesita mantener consenso electoral para sostener la gobernación bonaerense, los distritos que actualmente gobierna, consolidando su posición y en lo posible ir por más distritos bajo su conducción en el nuevo ciclo a disputar desde 2019.

Más allá de las posiciones del partido del Gobierno, el PRO, lo que importa es el consenso amplísimo de oficialistas y opositores, especialmente del peronismo diverso, en un rumbo que es claramente amigable con los objetivos y necesidades de los grandes empresarios locales y externos, quienes demandan acelerar las reformas reaccionarias que ahora no solo avala Macri, sino también los y las gobernadores/as.

Ahora el consenso se define en el Parlamento

El pacto fiscal actúa como un paraguas político para los legisladores que responden a los distintos poderes ejecutivos provinciales, y sustenten las propuestas legislativas en materia laboral, previsional y tributaria.

La estrategia del gobierno Macri apuntó a cambios sustanciales reaccionarios para luego negociar, especialmente con la cúpula de la CGT y los/as gobernadores/as. Primero se distribuyó para el debate una propuesta de máxima, que concitó rechazo, para terminar

elevando un borrador que mantiene la esencia de los cambios demandados por los inversores.

El objetivo de las propuestas, aun cuando no pasaron algunos intentos descabellados en materia de pérdidas de derechos sociales, sindicales y laborales, constituyen un paquete pro empresas, pro ganancias y apuntan a una lógica de favorecer la demanda de ganancias y por la acumulación de los potenciales inversores, locales o externos.

Disminución de indemnizaciones y baja de posibilidad de ejercer el derecho a litigio por despido figuran entre las principales consecuencias de la propuesta de flexibilización laboral sostenida del poder ejecutivo nacional, acompañada por una gestión administrativa del Ministerio de Trabajo contra las organizaciones sindicales.

La baja de aportes patronales y la impunidad hacia los evasores previsionales a cambio de regularización del empleo da cuenta de la general orientación para la reducción del costo empresario en la explotación económica. Claro que es consustancial con el orden capitalista, pero enfatiza el carácter clasista de la hegemonía legislativa buscada a favor de los intereses de los inversores.

Más claro queda el tema con el ahorro previsional buscado con las modificaciones a la actualización de las jubilaciones y prestaciones de la seguridad social. Las cifras son escandalosas y podrían alcanzar los 100.000 millones de pesos para el 2018. Si existe ahorro es en contra de los ingresos de los perceptores de la seguridad social, especialmente la población jubilada.

Esos “ahorros” en la seguridad social y algunos cambios impositivos constituyen la fuente de recursos para atender el acuerdo fiscal con los gobernadores. Los jefes políticos de las provincias, no San Luis por ahora, y el gobierno nacional son responsables directos de la estafa a las jubilaciones presentes y futuras.

La zanahoria ofrecida es que junto a la actualización trimestral por inflación habrá un porcentaje adicionado, quizás el 5% del crecimiento económico del PBI, Se trata de cifras menores a la formula actual y por eso se habla de ahorro. Lo cierto es que la pretensión oficial apunta a lograr consenso legislativo, imposible desde la minoría congresal de la coalición de gobierno, por lo que se buscó apoyo de gobernadores opositores y ahora en el Congreso. Si fuera posible, antes de fin de año.

El mapa de la confrontación al consenso

No solo existe la iniciativa del poder, mediada por el gobierno y los opositores funcionales a la lógica de la ganancia.

También actúa y desde el conflicto social una línea de confrontación con los propósitos de máxima de los capitales más concentrados que actúan en la economía local o que pretenden ingresar con sustanciales y reaccionarios cambios.

En el conflicto social que manifiestan cotidianamente organizaciones sindicales y territoriales se visibilizan diferentes estrategias sociales y políticas, que no terminan de

constituirse en hegemónicas de la diversidad que expresa la fragmentación de la sociedad de abajo.

Así, entre otros proyectos políticos emergen algunos que se referencian en el kirchnerismo, aun con diferencias entre ellos, incluso respecto del peronismo (con identidad matizada respecto al kirchnerismo); pero también en la izquierda partidaria, también protagonista de la fragmentación, aún con frente electoral de unidad.

Sin embargo, también existe una amplia franja que no se reconoce en estas identidades de peso electoral y que se manifiesta en una gran diversidad de organizaciones sociales y políticas que buscan su articulación y conformación en un proyecto alternativo que supere la gestión del orden capitalista.

En rigor, diversos espacios kirchneristas-peronistas y referidos a la izquierda partidaria, junto a este otro sector que mencionamos, transitan diversas propuestas de unidad de acción que no necesariamente fructifican en unidades políticas más efectivas a los efectos de definir una estrategia integral en la disputa del poder.

Una de las diferencias entre los proyectos remite al alcance de los propósitos de la unidad.

Para algunos alcanza con establecer límites al macrismo y sus políticas de ajuste y reestructuración, aunque eso suponga mantener una lógica de gestión capitalista aminorando la ofensiva del capital contra el trabajo o contra la Naturaleza. Para otros supone confrontar al orden capitalista y requiere una amplia fundamentación para ganar voluntades sociales contra el consenso político y mediático vigente.

Existen propuestas a caballo de ambas orientaciones, que atraviesan el debate entre las organizaciones sociales, las centrales sindicales y variadas agrupaciones políticas, culturales y sociales.

Hasta se sugiere la intervención papal en estas disputas, en una lógica de discusión de alternativas que supera los límites nacionales. Es que desde la ruptura de la bipolaridad hacia 1991 se habilitó la discusión por la recreación de la alternativa al capitalismo.

Lo que aparece en primer lugar es la crítica al capitalismo, pero con ello, quienes creen que se puede mejorarlo y quienes sostenemos el carácter incorregible del orden capitalista.

Nuestro debate en la Argentina no es distinto del que recorre Nuestra América o el mundo, concentrado en formas de acumulación de poder para reformar el capitalismo o para transformarlo.

En esa disyuntiva se discute el qué hacer en reuniones de la CGT, o si se quiere, de algunos gremios que discuten la orientación del triunvirato, o de muchos que manteniendo la afiliación a la Central mayoritaria no se reconocen en el liderazgo de los negociadores con el Gobierno; pero también ambas CTA, que discuten la reunificación o la afirmación de identidades propias con matizados proyectos estratégicos.

Adicionemos que la CTA en origen se propuso como articuladora del movimiento de

trabajadores y trabajadoras, no solo de sindicatos, sino también de movimientos sectoriales, territoriales, culturales y de personas, postura que ahora disputan organizaciones como la CTEP.

Más allá de la mención a centrales sindicales y de movimientos sociales, la conflictividad abarca al creciente movimiento de mujeres y diversas formas de reivindicaciones sociales, culturales, ambientales, de migrantes, en defensa de los pueblos originarios, por la tierra y la soberanía alimentaria, energética o financiera, dando forma una inmensa diversidad de inconformidad con la hegemonía capitalista y a veces, con el propio capitalismo. Es algo que se manifiesta en el movimiento Fuera la OMC.

Entre todas estas manifestaciones del conflicto social se redefine un nuevo mapa político de la confrontación social y política a los objetivos del consenso mayoritario de oficialistas y opositores en gobiernos locales y el nacional, como en el Parlamento.

Las cartas están echadas y el juego está en proceso. Debe reconocerse que quienes participan de la gesta no lo hacen por el solo placer de participar, sino que se apuesta a desplegar estrategias que puedan asegurar éxitos.

No es pequeño lo que está en juego, sea la consolidación del ajuste reaccionario favorable a los grandes inversores; la gestión de un orden capitalista contenido en su voracidad (imposible para quien escribe); o la perspectiva de discutir un horizonte de emancipación social. En definitiva, la construcción de una estrategia de poder alternativa a la iniciativa de la hegemonía reaccionaria en curso.

La Haine

https://www.lahaine.org/mm_ss_mundo.php/gobernadores-oficialistas-y-opositores-acuerdan